

La burguesía agraria argentina y el golpe de estado de 1976

The Argentine agrarian bourgeoisie and the coup d'état of 1976

Gonzalo Sanz Cerbino¹

Resumen: El presente artículo presenta un avance de investigación sobre la actuación política de la burguesía argentina en el período previo a la instauración del gobierno militar encabezado por el General Videla en 1976. Buscamos probar que ciertas fracciones de la burguesía se organizaron para impulsar la salida golpista, visualizada como única alternativa a la amenaza revolucionaria que planteaba la acción de algunos sectores de la clase obrera y de la pequeño burguesía. Nos concentraremos en particular sobre la burguesía agraria, prestando especial atención a una de las corporaciones empresarias que expresaba sus intereses: la Sociedad Rural Argentina.

Palabras-clave: Golpe de Estado – Burguesía Agraria – Revolución

Abstract: This article presents an advance of investigation on the political action of the Argentine bourgeoisie in the period before the restoration of the military government headed by the General Videla in 1976. We seek to prove that certain fractions of the bourgeoisie organized to stimulate the military coup, visualized like the only alternative to the revolutionary threat of some sectors of the working and middle class. We will center especially on the agrarian bourgeoisie, paying particular attention to one of the interest groups, the one that was expressing his interests: the Argentine Rural Society.

Key words: Coup d'état - Agrarian bourgeoisie – Revolution

Introducción

El golpe de estado que derribó al gobierno de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976 en la Argentina fue impulsado por varias fracciones de la burguesía como respuesta al crecimiento de las fuerzas revolucionarias y la amenaza que se cernía sobre la propiedad privada de los medios de producción. Una de las fracciones que más tempranamente pugnó

¹Licenciado en Historia (UBA), docente de la carrera de Historia (UBA) e investigador del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS). Actualmente se encuentra finalizando su tesis doctoral con una beca otorgada por el CONICET.

por esta salida fue la burguesía rural, que desde fines de 1974 comenzó una acción política cuyo objetivo era desestabilizar al gobierno democrático y tejer las alianzas que permitirían la instauración del régimen militar. En este artículo nos proponemos reconstruir la acción política de esta fracción durante los meses previos al golpe, centrándonos en las acciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que nucleaba a la burguesía terrateniente más concentrada.

Entrando en acción

Durante los primeros meses de 1975 existe una gran agitación en el agro argentino. Los paros y el recurso a la acción directa aparecen regularmente, no sólo en las medidas de alcance nacional, sino en una gran cantidad de acciones regionales y provinciales. El principal reclamo pasaba, en este período, por el defasaje entre los precios fijados por los organismos estatales y los costos que aumentan diariamente, en un contexto altamente inflacionario. El reclamo, sin embargo, va a asumir la forma de una protesta contra “el creciente intervencionismo estatal”.

Entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 1975, fecha en que estalla el primer paro comercial de alcance nacional, registramos nueve paros parciales o movilizaciones que afectan a distintas fracciones de la burguesía rural a lo largo del país. La principal forma de protesta a la que se recurrió fueron los paros comerciales, generalmente acompañados por medidas de acción directa tendientes a garantizarlos: cortes de ruta, actos y concentraciones, movilización a las municipalidades y ataques a quienes no se plegaran a la medida.

Algunos de estos paros fueron impulsados o apoyados por la Federación Agraria Argentina (FAA) y por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), mientras que la SRA mostró a lo largo del período una actitud más cauta, buscando siempre el diálogo con el gobierno. Desde fines de 1974, SRA integraba junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), el Comité de Acción Agropecuario (CAA). Este comité intentó obtener las mejoras reclamadas por sus bases recurriendo al diálogo con el gobierno. Sin embargo, los reajustes de precios o impositivos concedidos siempre llegaron tarde o fueron insuficientes. Los conflictos regionales que estallaban casi diariamente y las presiones provenientes de CARBAP, que integraba el CAA como miembro de CRA, son expresión de ello. Sin embargo, durante casi dos meses el CAA resistió las presiones que lo empujaban al paro y hasta condenó las medidas de fuerza apoyadas por Federación Agraria.

Sin embargo, estas presiones terminaron imponiéndose. El 28 de febrero se realizaron cinco asambleas convocadas por el CAA, con una presencia “multitudinaria de productores de todos los puntos del país”. Allí se dispuso, “por aclamación”, realizar un paro general de actividades comerciales agropecuarias de alcance nacional el 3 de marzo y por 24 horas. Durante ese día los productores no comprarían ni venderían productos, no realizarían operaciones bancarias ni gestiones comerciales, pero sin paralizar la actividad productiva en los establecimientos. En cada una de las asambleas se escucharon “agudas críticas” a la conducción económica y se “reclamaron urgentes medidas para los distintos sectores que conforman la actividad agropecuaria del país” (La Nación, 1/3/75).

Según los organizadores, la actividad comercial durante la jornada de paro fue “casi nula”, y estimaban la adhesión en un 90%. Se produjo una disminución en la entrada de animales en todos los mercados, no se realizaron remates-feria y en algunos lugares los comerciantes adhirieron al paro cerrando sus comercios durante la jornada o por algunas horas. En Buenos Aires se registraron incidentes que afectaron la provisión de leche, ya que “aún cuando la policía no confirmó los hechos, se supo que fueron volcados [...] varios camiones lecheros y en otros casos se impidió que los vehículos alzarán tarros con el producto en granjas de la zona sur” (La Nación, 4/3/75).

La ausencia de respuestas concretas del gobierno fue tensando la situación en las semanas siguientes. Durante el mes de abril asistimos a una presión fuerte de parte de CRA y las entidades adheridas a ella para ir a un nuevo paro (La Nación, 21 y 22/4/75). La negativa de SRA y CONINAGRO a volver al paro terminó con la ruptura del CAA. Quienes planteaban continuar la ofensiva contra el gobierno con un nuevo paro comercial formaron una nueva alianza para darle impulso. Durante los primeros días de mayo se produjo un acercamiento entre CRA y FAA, que determinó la convocatoria conjunta a un paro comercial ganadero por 3 días para el 19 de mayo. Evidentemente, SRA consideraba que continuar con un ciclo de paros nacionales agrarios llevaría a una desestabilización del gobierno obligando a un recambio. Aunque, a la vista de lo que sucederá en los meses siguientes, el golpe militar aparece como el objetivo estratégico de la acción política de esta corporación, se impone una diferencia táctica que la aleja de CRA: todavía no era el momento. Las tareas que recaerán sobre el futuro gobierno militar (aniquilar la insurgencia recurriendo a las torturas, reclusión en campos de concentración y ejecuciones clandestinas) demandaban, por lo menos, el apoyo del conjunto de la clase dominante, y el respaldo de buena parte de la pequeña burguesía. Para eso era necesario profundizar el desgaste del gobierno, esperando que se produjera el alejamiento paulatino de las fracciones de la clase dominante que aún lo apoyaban.

A pesar de su cautela, SRA se sumó pocos días después a un paro comercial decretado por el Comité de Defensa de la Producción Lechera (CODEPROLE), que integraba junto a CRA. El paro comercial se realizó entre el 4 y el 6 de junio, con un alto acatamiento, y el reclamo pasó por la homologación de los precios de productos lácteos, acordados entre industriales y tamberos (La Nación, 25 y 27/5/75).

El “Rodrigazo” como punto de inflexión

El gobierno de María Estela Martínez de Perón realizó un violento giro en materia económica con el nombramiento de Celestino Rodrigo como ministro, que asumió el 2 de junio de 1975. El programa que Rodrigo intentó aplicar consistía en un brusco descenso de los salarios reales, que apuntaba a constituirse en la punta de lanza de un relanzamiento de la acumulación de capital por la vía de un gigantesco aumento de la explotación. En términos generales, el plan se basó en una importante devaluación de la moneda y un fuerte aumento de precios y tarifas, que no serían acompañados por aumentos salariales, a los que el gobierno fijó un tope menor al aumento de precios. Sin embargo, pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de la clase obrera a ser la variable de ajuste. Rápidamente comenzaron a estallar paros parciales y movilizaciones contra lo que se conoció como “Rodrigazo”. Dirigida por cuadros de la izquierda revolucionaria, la resistencia al plan comenzó a darse órganos de coordinación que rebasaban la tradicional conducción peronista, en una escalada que amenazaba las propias bases de la dominación social (Lobbe, 2009; Kandel y Monteverde, 1976).

Ya en el ocaso de la gestión Rodrigo, pocos días después de un paro por 48 horas convocado por una CGT a la que sus bases estaban desbordando, y pocos días antes de que la movilización popular fuerce la salida del ministro de Economía, SRA emitió un extenso documento en el que se ofrece un balance de la situación. Allí se refirió, en primer lugar, a las gestiones económicas previas:

Desgraciadamente el gobierno no reaccionó a tiempo y el país entero tiene que pagar ahora un alto precio por ello. En lugar de ocuparse de promover una mayor producción agropecuaria, especialmente en aquellos rubros que alimentan nuestras exportaciones, la nefasta conducción económica [...] responsable de las decisiones agropecuarias hasta octubre del año pasado, se ocupó de cuestiones ideológicas, como el proyecto de ley agraria, de aumentar la carga impositiva y de deprimir los precios reales del campo. Posteriormente, en un marco de mejor entendimiento con nuestro sector, se dejó pasar el tiempo sin adoptar medidas de fondo a pesar de los esfuerzos

de algunos funcionarios importantes, y sólo últimamente, ante una crisis que ya no puede ocultarse, se manifestó la iniciación de un cambio de rumbo. (La Nación, 16/7/75).

Admitían los efectos recesivos y el esfuerzo económico que implicaba el plan para la clase obrera, pero sostenían que los problemas serían menos graves si la crisis se enfrentaba con “realismo”. El balance era claro: el plan Rodrigo implicaba un ajuste duro pero necesario. Son los errores de las gestiones económicas anteriores los que habían llevado la situación a ese punto, y la única forma de salir era mantener el rumbo elegido e, incluso, profundizarlo. La declaración no era sólo un respaldo al plan, fuertemente cuestionado, sino una advertencia: no se puede volver atrás, la reedición del reformismo peronista era insostenible. Como veremos, el fracaso del plan pondrá a la SRA, y al conjunto de la burguesía, nuevamente a la ofensiva. La derrota sufrida con la salida de Rodrigo, y la forma en que se produjo, empujada por una movilización de masas dirigida por la izquierda revolucionaria, que desbordó a los burócratas peronistas, marcó un punto de inflexión. Desde este momento la burguesía comenzó una ofensiva con un objetivo cada vez más claro: derrocar al gobierno. La ofensiva se observa, por un lado, en la radicalización de los discursos. Comienzan a reiterarse con insistencia una serie de elementos: en primer lugar, la caracterización de la situación como una crisis general, económica, política y social, producto de los errores del gobierno. A su vez, aumentan las referencias al problema de la “subversión”, con la que se hace referencia ya no sólo a las organizaciones armadas, sino también a las fracciones de la clase obrera que actuaban bajo la dirección de la izquierda, la “guerrilla fabril”. Por último, se insiste una y otra vez en la incapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de un permanente llamado al “restablecimiento del orden”, con claras connotaciones golpistas. El discurso del presidente de la SRA en la inauguración de la tradicional muestra de Palermo, el 27 de julio, es un ejemplo de ello:

Como argentinos y hombres de campo, nos causa enorme preocupación e inquietud la situación por la que atraviesa nuestra Patria. Queremos que de una vez por todas se encuentre el camino apropiado para la recuperación de la República. Estamos viviendo una crisis que abarca lo económico, lo social y lo político, pero que además tiene profundas raíces morales [...] Es indispensable que todos los sectores del país hagan un gran esfuerzo para superarla y para ello es fundamental asegurar el orden en todos los aspectos, para que renazca la confianza y tenga sentido el trabajo creador. (La Nación, 28/7/75).

El endurecimiento de las posiciones precedió a la convocatoria a nuevas medidas de fuerza encaradas por la burguesía agraria. A fines de agosto, el frente conformado por CRA y FAA convocó a un paro comercial ganadero de 11 días, que se realizaría entre el 19 y el 29 de septiembre. Estas entidades asumieron las posiciones más duras, negándose a asistir a reuniones que pudieran destrabar el conflicto. La SRA, por el contrario, mantuvo su posición cauta, asistiendo a las reuniones convocadas por el ministro de economía, aunque sin obtener resultado alguno. Luego del fracaso de las negociaciones, SRA decidió sumarse, a última hora, al paro convocado por CRA y FAA.

El paro se cumplió con un gran acatamiento en todo el país, acompañado por movilizaciones y cortes de ruta. Contó con la solidaridad de sectores del comercio y de la industria, que realizaron cierres y apagones en solidaridad con la medida. También recibió el respaldo de algunos partidos políticos, que se pronunciaron a favor. Finalizada la medida de protesta, las entidades convocantes mantuvieron el estado de alerta y abrieron un paréntesis de 10 días para retomar el diálogo con el gobierno. Las reuniones entre las entidades y las autoridades nacionales se sucedieron vertiginosamente en los días posteriores, sin que las promesas oficiales pudieran torcer la voluntad de las corporaciones rurales de ir a un nuevo paro.

El siguiente paro comercial, quinto y último de 1975, se convocó para el 24 de octubre, y tuvo una duración de 18 días. Esta vez, no medió espacio entre la convocatoria y la efectiva realización del paro. El 17 de octubre, la comisión directiva de SRA resolvió declararse en sesión permanente, “dada la grave situación que vive el país y, en particular, el sector agropecuario” (La Nación, 18/10/75). El 21 de octubre, CRA y FAA convocaron al nuevo paro comercial ganadero, que comenzaría 3 días después (La Nación, 22/10/75). Un día después SRA anticipaba su decisión de sumarse al paro con un duro comunicado contra el gobierno (La Nación, 23/10/75). Sobre la situación general del país, señalaba:

La dramática situación que vive la Nación obliga a analizar situaciones, fijar posiciones y asumir responsabilidades [...] La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza en los habitantes que enerva toda actividad constructiva. No se percibe claridad de objetivos en la conducción política y económica, ni una acción definida, en todos los niveles, en contra del extremismo.

Sobre la economía agregaba:

Un sistema equivocado basado en un creciente intervencionismo estatal, que en las últimas décadas ha demostrado repetidamente su fracaso, ha

llevado a los extremos actuales de empobrecimiento general y de una inflación nunca vivida, con su secuela de especulación e inmoralidad que lleva a la descomposición económico-social, y a gravísimas situaciones en el sector externo [...] Continuamos en el camino de desorientación, inseguridad y desorden.

El anuncio repentino de la medida y su extensión tomó por sorpresa al gobierno, que no pudo acumular stocks de hacienda. El masivo acatamiento tuvo importantes consecuencias: su resultado fue un pronunciado desabastecimiento y el aumento en los precios de la carne y de sus substitutos, que en un contexto inflacionario trajo graves problemas para el gobierno. Frente a la escalada de los precios, el Ministerio de Economía fijó precios máximos para todos los cortes de carne y amenazó con aplicar la ley de abastecimiento expropiando hacienda. Sin embargo las medidas tomadas no pudieron evitar las consecuencias del paro comercial: los dueños de carnicerías salieron a denunciar que el producto no les llegaba a los precios fijados por el gobierno, y declararon un lock out hasta que se garantice el abastecimiento a los precios oficiales (La Nación, 31/10/75, 1/11/75 y 5/11/75).

Este nuevo paro contó con el respaldo de varios partidos políticos y de las corporaciones empresarias más importantes del país. Se produjeron movilizaciones, concentraciones, cortes de ruta y cierres de comercios en solidaridad en varias ciudades del interior. A su vez, el gobierno denunció que se produjeron amenazas y atentados contra aquellos que no se sumaron a la medida de fuerza (La Nación, 6/11/75).

Una vez concluido el paro, la ofensiva de la burguesía no cejó. Las declaraciones y los pronunciamientos iban aumentando su virulencia a medida que la crisis se profundizaba. Las amenazas de nuevos paros eran casi diarias y ya se hablaba abiertamente del golpe de estado en todos los ámbitos. Un discurso pronunciado por el presidente de la SRA a mediados de diciembre señaló que se estaba frente a una guerra, que enfrentaba de un lado a los defensores del status quo, y por otro a la “subversión”. La política del gobierno, responsable del caos, sólo servía para allanar el camino al “marxismo”, que se prepara para la toma del poder. Es decir, que sus acciones ponían al gobierno, objetivamente, en el bando enemigo. El discurso comenzó señalando que “la Sociedad Rural Argentina no puede estar de fiesta ante la dramática situación por la que atraviesa el sector y todo el país”. Era necesario que el gobierno revea:

De inmediato el esquema económico, político, social e ideológico que lo ha llevado a esta situación, pues, si no lo hace, sólo él será responsable del caos político y de la crisis que el marxismo, con sutileza, sigue preparando,

en acechanza del poder [...] Debemos resguardar las libertades, los derechos y las garantías establecidas por la Constitución Nacional. Debemos restaurar el orden y la autoridad necesarios para la convivencia. Debemos asumir plenamente el hecho de que se está librando una guerra decisiva y de que no somos ni podemos ser ajenos a ella, y que esa guerra se libra en muchos frentes, unos visibles, que son regados por la sangre de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, otros disimulados y más peligrosos aún, como la infiltración en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, como así también en la Administración Nacional. Por ello es que los convoco para que desde hoy tomemos la más firme determinación de luchar en todos los frentes. Debemos apoyar la acción gremial de todas las entidades representativas de cualquier sector sano del empresariado nacional que se identifiquen con nosotros en sus ideologías y coincidan en la defensa del principio de la libre empresa (La Nación. 13/12/75).

Finalmente, cerró exhortando a los productores a continuar en la lucha, frente al peligro que se cernía sobre las propias bases de la sociedad capitalista:

Deberemos apelar a todas nuestras reservas, porque ya nadie deja de percibir que lo que está aquí en juego no es un triunfo electoral o el predominio de un grupo sobre otro, sino toda una manera de concebir la vida, que determinará el mundo sombrío o brillante en el que deberán crecer nuestros hijos: el del colectivismo o el de la libertad (La Nación. 13/12/75).

La lucha se acercaba a momentos decisivos, y dado que la inoperancia del gobierno jugaba en favor de los “enemigos de la patria”, había que terminar con el gobierno.

Un partido y un programa para la contrarrevolución: la creación de APEGE

En su ofensiva contra el gobierno de Isabel Perón, la burguesía constituyó, en la segunda mitad de 1975, una organización política que dirigiera su lucha. Esta organización, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), delineó el programa de la contrarrevolución, que luego del golpe de estado de marzo de 1976, llevarían adelante las Fuerzas Armadas. A su vez, a través de ella se canalizaría la acción política tendiente a desgastar al gobierno y arrebatarle su base social (sobre todo, conquistar para su estrategia a las fracciones de la burguesía y de la pequeña burguesía que todavía lo apoyaban). La burguesía agraria tuvo un rol destacado en la creación de este

instrumento, especialmente SRA y CARBAP, que impulsaron su constitución e integraron su dirección.

El origen de APEGE se remonta a agosto de 1975, a partir de las reuniones sostenidas por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Unión Comercial Argentina (UCA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y CARBAP. Al poco tiempo se sumaron SRA y la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas (CAMSACOM) (La Nación, 19/9/75). Estas corporaciones integrarían su dirección, el Secretariado Ejecutivo, constituido en septiembre de ese año (La Nación, 15/9/75). A fines de octubre se realizó una reunión plenaria en la que se votó un programa, que sería refrendado por las bases empresarias en 3 asambleas simultáneas el 13 de diciembre de 1975 (La Nación, 23/10/75 y 14/12/75). Un programa que tenía cuatro ejes claros. En primer lugar, restablecer el orden, eliminando a la subversión. En segundo lugar, y asociado a este, eliminar aquellos elementos que en las fábricas dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Se referían a los instrumentos legales y organizativos de los que se valía la clase obrera para impedir el aumento de la explotación, y en particular, a las comisiones internas dominadas por la izquierda revolucionaria. En tercer lugar, se apuntaba a un recorte de los gastos estatales y a eliminar los aumentos de impuestos que servían para financiar el déficit fiscal. Es decir, se oponían a destinar parte de la plusvalía a sostener empresas ineficientes y transferencias hacia la clase obrera. Por último, con un objetivo similar, se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior. Los mecanismos con los cuales el Estado se apropiaba de la renta, subvencionaba el consumo y protegía a una industria incapaz de competir.

Como lo demostró el fracaso del Rodrigazo, este programa no podría implementarse en los marcos de la democracia burguesa. Lo que había fracasado hasta el momento no era el gobierno peronista, sino la estrategia de contener el avance revolucionario dentro de los marcos democráticos. El disciplinamiento de la clase obrera y la eliminación de su vanguardia, requisitos indispensables para la implementación del programa, solo podrían obtenerse bajo un régimen de excepción. Por eso, estas fracciones de la burguesía concentraron su acción en generar las condiciones para el golpe. Es así que, mientras APEGE y las corporaciones de la burguesía que la integraban avanzaban en su acción de desgaste del gobierno democrático, encolumnando al conjunto de la burguesía tras su estrategia y buscando neutralizar cualquier atisbo de resistencia al golpe, el personal técnico que llevaría a cabo el programa, los militares que encabezaron el golpe, fueron ubicándose en sus posiciones. Por debajo de la mesa, civiles y militares ultimaban detalles. Algunas de estas negociaciones han trascendido, como la reunión que mantuvo el Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, en noviembre de 1975, con dirigentes de SRA. Allí se

manifestó la preocupación por el avance de la “subversión”, a la que no se dudó en relacionar con la política del gobierno:

La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe una acción definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos (Memoria y Balance, SRA, 1976).

Pero, como decíamos, para dar el golpe, y para que este pudiera llevar adelante las tareas que demandaba el aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias, era necesario generar las condiciones políticas que lo hicieran posible. Esto es, obtener el mayor apoyo posible para este programa. Y en los casos en que no se consiguiera el apoyo, obtener por lo menos una neutralidad que garantizara la menor resistencia al golpe. La disputa política más importante del momento pasó por demostrar que el gobierno reformista era incapaz de encausar la situación.

A eso apuntaba la ofensiva final encabezada por APEGE, que comenzó a fines de 1975 y culminó con el golpe de marzo de 1976. El factor aglutinante fue el intento gubernamental de imponer una reforma impositiva, que rápidamente se ganó el repudio del conjunto de la burguesía. Los primeros comunicados de la entidad ya amenazaban con la convocatoria a un lock out que aglutinaría al conjunto del empresariado, medida que consiguió el respaldo de las bases empresarias en la asamblea del 28 de enero de 1976. La fecha fijada para la medida de protesta fue el 16 de febrero, y los reclamos no se concentraron sólo en la reforma fiscal sino que exigieron un drástico giro en la política económica: reducción del gasto público, reducción de la carga fiscal, derogación de la legislación laboral, eliminar a las comisiones internas y el activismo sindical de las fábricas, liquidar a la subversión y restablecer el orden.

A lo largo de las dos primeras semanas de febrero fueron llegando adhesiones de distintas cámaras al lock out, votadas en centenares de asambleas a lo largo de todo el país. La medida contó con el apoyo de unas 1.200 cámaras comerciales e industriales, generando una adhesión casi unánime en todo el país, especialmente en el comercio y en el agro (La Nación, 16, 17 y 18/2/75). A diferencia de los últimos dos paros comerciales agrarios de 1975, el lock out de APEGE no generó problemas de abastecimiento ni aumentos de precio. Sin embargo, el impacto político de la medida fue aún más significativo. El apoyo masivo de la burguesía al paro, y por ende, al programa golpista impulsado por APEGE, quedó cabalmente demostrado. El gobierno democrático había perdido el apoyo de la clase dominante. A su vez, la medida sirvió también para medir el respaldo que aún

conservaba el gobierno en la clase obrera. La completa pasividad de los trabajadores, que no salieron a enfrentar el paro golpista ni a respaldar al gobierno, terminó de definir su suerte. El futuro golpe de estado tenía el respaldo de la clase dominante, y se había obtenido, por lo menos, la neutralidad complaciente de los explotados.

Conclusiones

Desde comienzos de 1975 asistimos a una ofensiva política que emprenden algunas fracciones de la burguesía contra el gobierno de Isabel Perón. Esta ofensiva asume características golpistas, que se harán visibles a medida que la crisis hegemónica se profundice. La ofensiva fue impulsada, en primer lugar, por la burguesía rural, hecho que atestiguan las declaraciones y las acciones de fuerza emprendidas por las corporaciones que expresan sus intereses. La ofensiva se profundizó en julio de 1975. La derrota del plan de ajuste ideado por Celestino Rodrigo enciende el alerta. La clase dominante parece comprender, como muestran las acciones que emprenderá de aquí en adelante, que la resolución de la crisis sólo podría realizarse si deba dar antes un paso previo: disciplinar a la clase obrera, derrotar y eliminar a su vanguardia. Esto no podía hacerse dentro de los marcos democráticos, y por esa razón el golpe militar contrarrevolucionario se transforma en la única alternativa viable. La ofensiva desatada en julio y agosto buscó distintos objetivos: generar el máximo desgaste posible al gobierno de Isabel Perón, arrebatándole el poco respaldo que le quedaba. Nuclear tras el programa golpista al conjunto de las fracciones de la clase dominante y neutralizar a aquellas fracciones de la clase obrera que podrían enfrentar el golpe, presentando esta opción como única alternativa posible frente al caos. A su vez, la burguesía golpista se dio una organización centralizada que dirigió la acción y delineó el programa del golpe: APEGE. Por último, se trazaron los lazos con los militares que realizarían la tarea. En todo este proceso, la burguesía agraria tuvo un rol fundamental.

Bibliografía

- Makler, Carlos. Las corporaciones agropecuarias ante la política agraria peronista (1973-1974). En GRACIANO, Osvaldo; Talía GUTIÉRREZ (dir.): **El agro en cuestión. Discursos, políticas y corporaciones en la Argentina, 1870-2000**. Buenos Aires: Prometeo, 2006.
- Sidicaro, Ricardo. **Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
- Palomino, Mirta. **Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)**. Buenos Aires: CISEA-GEL, 1988.

Palomino, Mirta. **Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1973.** Buenos Aires: CISEA, 1989.

O'Donnell, Guillermo. **Catacumbas**, Buenos Aires: Prometeo, 2008.

Kandel, Pablo; Mario Monteverde. **Entorno y caída.** Buenos Aires: Editorial Planeta, 1976.

Giberti, Horacio. CONINAGRO y la última dictadura militar. En **Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios.** Buenos Aires, Nº 17, 2002, pp. 129-137.

Lobbe, Héctor. **La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976).** Buenos Aires: Ediciones ryr, 2009.

Fuentes

Periódico La Nación.

Fundación para el estudio de los problemas argentinos. Constelación del poder real en Argentina: entidades agropecuarias. **Documento de Trabajo Nº 4.** 1978.

Aguado, Jorge. **Cuatro años de acción gremial.** Buenos Aires: CARBAP, 1977.

SRA. **Memoria y Balance,** 1976.

Recebido em *Abril* de 2010
Aprovado em *Agosto* de 2010